

ISSN: 1130-2887

VOZ Y VOTO: PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO

Voice and vote: political participation and quality of democracy in Mexico

Claudio A. HOLZNER

Universidad de Utah

✉ claudio.holzner@poli-sci.utah.edu

BIBLID [1130-2887 (2007) 45, 69-87]

Fecha de recepción: octubre del 2006

Fecha de aceptación y versión final: febrero del 2007

RESUMEN: La igualdad intrínseca de cada ciudadano es una suposición fundamental de cualquier sistema democrático. Por esto, cualquier evaluación de la calidad de la democracia tiene que considerar la «igualdad de voz», o sea, el grado en que los ciudadanos tienen oportunidades más o menos iguales de participar en la toma de decisiones colectivas. Este ensayo hace una evaluación de la calidad de la democracia en México con especial atención a las desigualdades que existen en la participación política de ciudadanos con niveles de ingresos altos y bajos. Los pobres en México votan menos y participan menos que los ciudadanos de mayores recursos económicos en actividades políticas dirigidas directamente a los gobernantes. Cuando participan tienden a hacerlo en actividades con poca capacidad de comunicar información sobre sus preferencias o de presionar a las autoridades, produciendo las condiciones para que los gobiernos no respondan por igual a las demandas de todos los grupos sociales.

Palabras clave: participación política, México, pobreza, democracia.

ABSTRACT: Because intrinsic equality of each citizen is a fundamental assumption of democracies, any assessments of the quality of democracy must consider the equality of political voice, that is whether a political system provides citizens with more or less equal opportunities to participate in collective decisions. This essay examines patterns of political participation in Mexico to assess whether there are systematic inequalities in the abilities of Mexicans from different income groups to exercise their voice in the political process. The evidence shows that the poor in Mexico vote less often and participate less frequently in government-directed political acts than the wealthy. When they do participate, the poor do so in activities which have little capacity to inform about their needs and preferences, and with little capacity to put pressure on government

officials. This creates conditions for governments to not be responsive to or representative of the demands of different social groups.

Key words: political participation, poor, Mexico, democracy.

I. INTRODUCCIÓN¹

El sistema político mexicano ha sido caracterizado como «la dictadura perfecta» por sus frecuentes elecciones, la legitimidad de sus gobiernos y, sobre todo, por el gobierno ininterrumpido del mismo partido político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante más de 70 años. Durante este período de gobierno autoritario, la participación política de grupos populares se promovía sólo cuando demostraba apoyo al régimen político, se toleraba cuando el fin era conseguir apoyo material y financiero del gobierno y, frecuentemente, se reprimía con violencia si la intención era reformar a fondo el sistema político. A partir de la década pasada, México se alejó decididamente de prácticas autoritarias para embarcarse en profundas reformas democráticas. Hoy en día, los ciudadanos pueden votar por sus candidatos preferidos, son libres de participar en marchas y protestas, y de exigir pequeños y grandes cambios al sistema de gobierno, sin temor a ser víctimas de represión por parte del Estado. Este cambio democrático culminó en el año 2000, con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales.

Seis años más tarde, vale la pena hacer una evaluación de la calidad de la democracia en México. Desde un punto de vista centrado en procesos políticos y normas jurídicas, no cabe duda de que la transición y consolidación democrática se han logrado con éxito: los gobernantes son elegidos por los ciudadanos por medio de elecciones frecuentes; la integridad y limpieza de estas elecciones están aseguradas; la libertad de prensa, de asociación y de expresión están garantizadas; las Fuerzas Armadas están bajo control civil y no existen obstáculos jurídicos importantes a la participación ciudadana en la vida política del país. Por muy útil que sea, como punto de partida, un enfoque en las reglas y en los procesos políticos, Levine y Molina (2007) tienen razón al notar que estos criterios para evaluar sistemas democráticos tienen importantes limitaciones.

Las elecciones y los sistemas electorales nos dan un importante punto de entrada, pero ellos deben ser situados dentro del contexto social, prestando atención no sólo a las reglas formales de representación sino también a los factores que afectan el flujo de información y el acceso a éste, conjuntamente con las condiciones para la organización y las barreras que enfrentan los grupos y candidatos cuando intentan participar democráticamente en política (Levine y Molina, 2007: 7).

1. Agradezco los comentarios y sugerencias de Scott Mainwaring, Michelle Ferguson, Vince Cheng y Mark Button que enriquecieron este ensayo. Quisiera también agradecer a Melissa Goldsmith, cuya asistencia con el manejo de las bases de datos fue indispensable para este trabajo y a los revisores anónimos de *América Latina Hoy*, *Revista de Ciencias Sociales*.

La igualdad intrínseca de cada ciudadano es una suposición fundamental de cualquier sistema democrático. Por esto, cualquier evaluación de la calidad de la democracia tiene que considerar la igualdad de «voz», o sea, el grado en que los ciudadanos tienen oportunidades más o menos iguales de participar en la toma de decisiones colectivas y de tener libre acceso a los funcionarios y representantes políticos entre elecciones (Dahl, 1989; Verba, Schlozman y Brady, 1995). Este ensayo propone una manera sencilla pero útil de medir el nivel de voz política de diferentes grupos sociales para evaluar el grado en que el sistema democrático mexicano garantiza la igualdad política de sus ciudadanos. Desde esta perspectiva, la evaluación de la democracia en México no es tan positiva. A sólo unos años del fin de la «dictadura perfecta», los pobres en México dudan que las elecciones les den mucho poder sobre los líderes elegidos, votan menos que antes y parecen haberse resignado a tener poca voz en el proceso electoral. Ellos también participan menos que los ciudadanos con mayores recursos económicos en actividades políticas dirigidas directamente a los gobernantes y, cuando participan, tienden a hacerlo en aquellas con poca capacidad de comunicar información o de presionar a las autoridades. El peligro está en que esta desigualdad de voces que se escuchan en los centros de poder se traduzca en políticas públicas que no tomen en cuenta las necesidades y preferencias de más de la mitad de la población.

II. LA VOZ CIUDADANA EN SISTEMAS DEMOCRÁTICOS

La participación ciudadana ha sido fundamental para la mayoría de los intentos de evaluación de la calidad de la democracia y toma especial importancia en la conceptualización de Levine y Molina (2007: 9-11). Las democracias deben proporcionar a todos los ciudadanos oportunidades adecuadas e iguales para expresar sus preferencias y para incidir en las agendas decisionales de los gobiernos (Dahl, 1989: 109-115). Sin tal participación eficaz, las otras tres dimensiones de los gobiernos democráticos que enfatizan Levine y Molina –responsabilidad, respuesta a la voluntad popular y soberanía– no se cumplirán. Sin embargo, no todas las actividades políticas tienen la misma capacidad de comunicar información o de presionar a líderes. Por ejemplo, a pesar de que gran parte de la literatura iguala el principio de «cada persona, un voto» con la igualdad política, el sufragio tiene una capacidad de comunicación y de presión muy baja (Verba, Schlozman y Brady, 1995: 12-14), que hace que por sí mismo sea un medio inadecuado para asegurar que se consideren con igual peso los intereses de los ciudadanos. Otras actividades políticas son mucho más eficaces para influir sobre las decisiones de las autoridades y para asegurar que los gobiernos respondan por igual a las necesidades de todos los grupos sociales.

Es útil recalcar tres componentes de la voz ciudadana: 1) la frecuencia con la cual individuos o grupos intentan actos políticos, o sea, la intensidad de la participación; 2) la capacidad de estos actos para comunicar información a las autoridades; y 3) la

capacidad que tienen para obligarlos a rendir cuentas ante los ciudadanos². Las distintas formas de participación política no tienen la misma capacidad de generar esta voz ciudadana eficaz. Protestas y marchas, por ejemplo, son más difíciles de organizar pero mandan mensajes mucho más claros y precisos y ponen mucha más presión sobre los gobiernos que el voto en sí mismo. Por tanto, desigualdades en la voz ciudadana surgen cuando algunos grupos sociales pueden comunicar sus preferencias con más fuerza por la frecuencia con la que participan y por el tipo de actividades que logran desempeñar.

Tomando estos puntos en cuenta, se pueden clasificar las distintas actividades políticas según el potencial que tienen para darle una voz eficaz a los ciudadanos en las decisiones de los gobiernos. El Cuadro I, basado en parte en las evaluaciones de Verba, Schlozman y Brady (1995), muestra esta clasificación. La segunda y tercera columnas indican la capacidad de cada actividad para comunicar información a los líderes políticos y el grado en el cual las actividades se pueden multiplicar para poner más presión sobre funcionarios gubernamentales³. Aunque estoy de acuerdo con la mayoría de las evaluaciones de estos autores, incluyo algunas actividades comunes en México que generalmente no se consideran como actos políticos o públicos⁴. Con base en estos atributos, y en los resultados de encuestas recientes que miden niveles de participación ciudadana, podemos deducir la capacidad de voz que tienen los ciudadanos de diferentes clases sociales en el sistema político mexicano.

CUADRO I
LOS ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES POLÍTICAS

Actividad	Capacidad de comunicar información	Capacidad para multiplicarse y ejercer presión
Votar	Baja	Baja
Participación en actos de campaña	Mediana	Baja
Donar dinero a campañas	Alta	Alta
Contactar autoridades	Alta	Mediana
Protestas, marchas, huelgas	Alta	Alta
Trabajo informal comunitario*	Muy Baja	Muy Baja
Afiliarse a una ONG*	Baja	Baja
Migración*	Ninguna	Ninguna

Fuente: VERBA, SCHLOZMAN y BRADY (1995: 48), con excepción de las actividades señaladas con un asterisco.

En la práctica, el principio de igualdad política se debe interpretar ampliamente, no sólo en base a las reglas formales de juego, sino también considerando la real

2. Este análisis debe mucho a la discusión de S. VERBA, K. L. SCHLOZMAN y H. E. BRADY (1995) en los primeros dos capítulos del libro *Voice and Equality*.

3. Estas evaluaciones son válidas sólo para el caso de México, ya que la capacidad de cada actividad de transmitir voz ciudadana depende de los vínculos entre instituciones políticas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Por tanto, el nivel real de voz de cada actividad no será igual en diferentes países.

4. Los lectores interesados en mayores detalles sobre la construcción de esta tabla pueden consultar el capítulo 2 de *Voice and Equality*.

capacidad de diferentes grupos para emprender actividades políticas (Dahl, 1989). Por ejemplo, podemos imaginarnos un sistema político en el cual no existen diferencias socioeconómicas en el comportamiento electoral de los ciudadanos, pero sí importantes diferencias en quienes participan en marchas o contribuyen con dinero a las campañas políticas. Si la gente adinerada participa con más frecuencia en actividades con alto potencial de voz política, el proceso político probablemente desviará las políticas públicas en favor de éstos, aunque no existan sesgos en la población votante. En pocas palabras, para evaluar la capacidad de los gobiernos democráticos para responder y representar las preferencias ciudadanas, es necesario ir más allá de un análisis del comportamiento electoral y examinar los tipos de actividades en las cuales realmente participan los ciudadanos, la cantidad y calidad de la información que estos actos pueden comunicar y la capacidad de éstos para presionar a los diferentes niveles de gobierno.

Desigualdades en la voz ciudadana, sobre todo desigualdades sistemáticas que coinciden con divisiones sociales (como pueden ser de género, de ingresos, de religión), perjudican a la democracia porque afectan los mensajes que escuchan los políticos y reducen los incentivos que tienen para responder a las demandas de algunos grupos. Al evaluar la igualdad política de los sistemas democráticos, es importante distinguir entre restricciones formales a la participación ciudadana, que son pocas en México, y restricciones y obstáculos *de facto*, que son muchos. En algunas democracias, incluyendo la de los Estados Unidos, las mujeres participan con menor frecuencia que los hombres a pesar de que las reglas que restringían su participación se eliminaron décadas atrás. Además, ciertas condiciones institucionales, como la fuerza de los sindicatos, las normas sobre el financiamiento de las campañas, las reglas electorales y las características del sistema de partidos también pueden frenar la participación política de algunos grupos sociales. Uno de los obstáculos más comunes, y para los países latinoamericanos más relevantes, es la distribución desigual de los recursos económicos y políticos (Dahl, 1989: 323).

Además, «cómo» los ciudadanos participan en la vida política de su país es tan importante como «quiénes» participan, para una evaluación completa de la calidad de la democracia. Los distintos actos no sólo tienen diferentes capacidades de comunicar la voz ciudadana, como ya se ha dicho, también desempeñan diferentes funciones dentro del proceso democrático. Algunas actividades, como elecciones y plebiscitos, tienen como fin tomar decisiones colectivas. En cambio, otras actividades son más propicias para definir la agenda decisional de los gobiernos o para influir sobre las decisiones de las autoridades gubernamentales. En la práctica, no es el sufragio el medio por el cual los ciudadanos pueden exigirle la rendición de cuentas a los gobiernos democráticos, sino actividades como protestas, contacto directo con funcionarios públicos y campañas en los medios de comunicación. Distorsiones al principio de la igualdad política también pueden surgir, por lo tanto, cuando algunos grupos sociales o económicos participan más seguido en este tipo de actividades, aun si no acuden nunca a votar. Como consecuencia, una evaluación completa de la voz ciudadana y, por lo tanto, de la calidad de la democracia, tiene que considerar no sólo diferencias en los

niveles de participación, sino también la variación en los tipos de actos políticos que los grupos sociales logran emprender.

Tenemos que considerar la posibilidad de que los ciudadanos prefieran no perseguir sus intereses a través del proceso político formal, sino a través de actividades informales como la cooperación entre vecinos para resolver problemas colectivos, la participación en organizaciones comunitarias y otras actividades que no apunten directamente a las instituciones del Estado (Booth y Seligson, 1978; Dietz, 1998). Este tipo de actividades son especialmente importantes para grupos de bajos recursos económicos y han recibido la mayor parte de la atención de los académicos interesados en la participación política en América Latina. Además de estas actividades formales e informales, los actores sociales pueden escoger estrategias privadas –como para conseguir un segundo (o tercer) empleo, apoyarse más en familiares y la emigración– para lograr sus objetivos. Huntington y Nelson nos explican que algunos asuntos, como el efecto de una sequía, problemas de infraestructura local o la promoción del bienestar familiar

[...] pueden o no motivar a individuos o grupos a intentar actividad gubernamental, dependiendo de las percepciones sobre la disponibilidad y eficacia de estas estrategias comparado con otros medios [...] Si actividades fuera del ámbito político son tanto o más prometedoras que actividades políticas, podemos esperar que la gente invierta su tiempo y energía correspondientemente (Huntington y Nelson, 1976: 17).

Estas actividades comunitarias o privadas se pueden considerar como estrategias de salida, puesto que no tienen el fin de comunicar información a autoridades gubernamentales ni de poner presión sobre ellas. Al contrario, su fin es proporcionar soluciones a problemas individuales o colectivos sin involucrar a gobiernos locales o federales. Aunque estas estrategias de salida no tienen objetivos explícitamente políticos, sí tienen importantes consecuencias para la «igualdad de voz» y para la calidad de los sistemas democráticos.

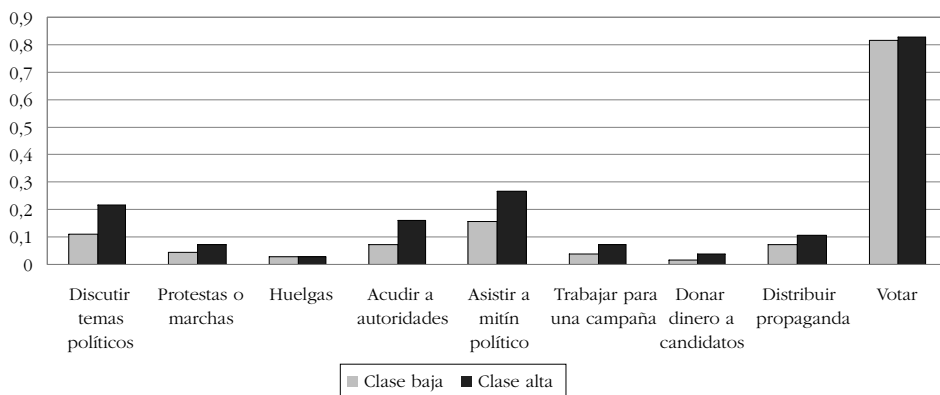
Las siguientes secciones analizan la participación ciudadana en México en un intento de evaluar si existen desigualdades sistemáticas en las capacidades de los ciudadanos de diferentes niveles de ingresos en expresar su voz en el proceso político mexicano. El análisis se basa sobre todo en dos base de datos: la Encuesta Mundial de Valores (*World Values Survey* –WVS–) realizada en México entre 1995 y 2000, y las encuestas realizadas por el Estudio Comparado de Sistemas Electorales (*Comparative Studies of Electoral Systems* –CSES–) entre 1997 y 2003 también en México. Aunque existen muchas otras encuestas sobre opinión pública más recientes en México⁵, estos estudios tienen la ventaja de proporcionar información detallada tanto sobre la participación política como del nivel de ingresos de los mexicanos.

5. Por ejemplo, las Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la SEGOP (Secretaría de Gobernación) tienen abundantes datos sobre las actividades políticas de ciudadanos pero no son útiles para este análisis puesto que no reportan los niveles de ingresos de los encuestados.

III. PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO

El Gráfico I utiliza las mejores fuentes de datos sobre la participación ciudadana en México para comparar los patrones de participación de los ciudadanos con un bajo nivel de ingresos (entre 0 y 3 veces el salario mínimo, o sea de \$0-3.384 pesos mensuales en el año 2000) y con un alto nivel de ingresos (más de 7 veces el salario mínimo, o sea más de \$7.897) en México (CSES, 1997-2003; Inglehart, 1995-1997 y 1999-2002). Es evidente que para el año 2000, cuando había culminado la transición democrática con la victoria del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el PRI en las elecciones presidenciales, individuos con ingresos altos participaban con mayor frecuencia que individuos con ingresos bajos en todas las actividades para las cuales tenemos datos disponibles.

GRÁFICO I
 ESTRATIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO (2000)

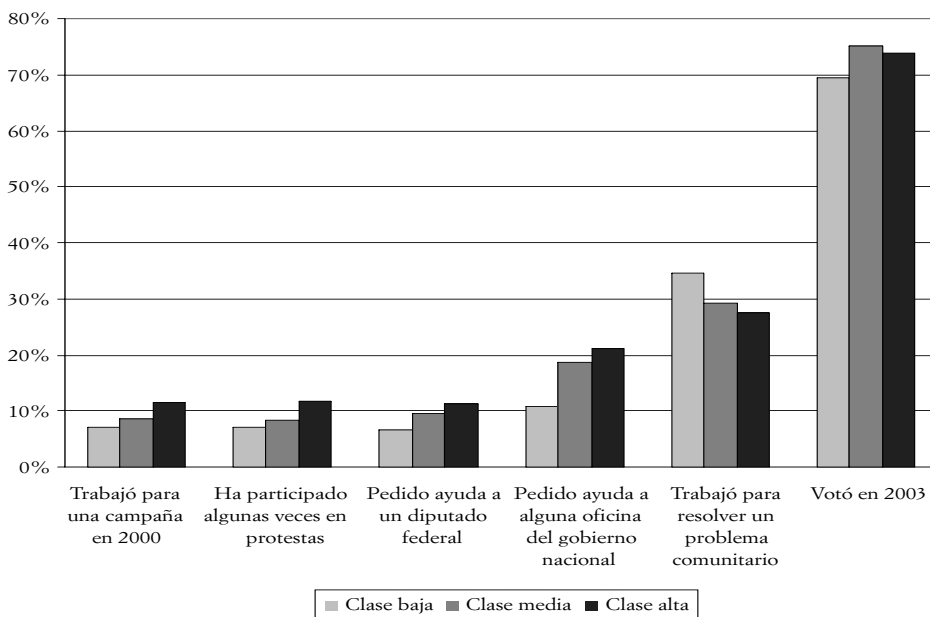


Fuente: *Comparative Studies of Electoral Systems* (CSES) y *World Values Survey* (WVS).

Esta estratificación de la participación por niveles de ingresos es un fenómeno bastante reciente. Antes del 2000, los pobres participaban en marchas y huelgas con la misma frecuencia que la gente de mayores recursos económicos (Holzner, 2007) y, probablemente, intentaban contactar a funcionarios gubernamentales con mayor frecuencia, aunque sólo existen datos específicos para grupos populares (Cornelius, 1975). Lo mismo vale para el comportamiento electoral. Aunque los resultados de las encuestas del CSES no demuestran una gran diferencia en los niveles de abstencionismo entre ricos y pobres, otros estudios han encontrado una creciente estratificación por niveles de ingresos en la población votante (Klesner y Lawson, 2000; Lawson y Klesner, 2004). De hecho, los ricos no siempre votaban más que los pobres. Al contrario, durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 los pobres y la gente con bajos niveles de escolaridad acudían con mayor afluencia a votar que la gente con mayor educación e ingresos (Craig y Cornelius, 1980; Durand Ponte, 1995). La presente estratificación por clase social no se estableció hasta después de 1990 (Lawson y Klesner, 2004).

Es posible que al consolidarse más las prácticas democráticas en México después del 2000, esta estratificación en la participación ciudadana haya ido disminuyendo. Pero estudios de encuestas recientes demuestran que éste no es el caso. El Gráfico IA resume los resultados de una investigación realizada en el 2004 sobre la cultura política y la participación democrática en México por la Universidad de Pittsburgh y distribuida por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)⁶. Se puede notar que en el 2004 la situación no ha cambiado: personas de elevados recursos económicos (ingresos de más de \$10.000 pesos mensuales) participan con mayor frecuencia en casi todas las actividades políticas que gente de bajos (menores a \$3.200 pesos mensuales) e ingresos medianos (entre \$3.200 y \$10.000 pesos). Los pobres participaron con más frecuencia solamente en actividades comunitarias, como el donar dinero y materiales, o contribuir con el propio trabajo para solucionar algún problema de la comunidad. Pero como ya se notó anteriormente, este tipo de actividades se puede considerar como una estrategia de salida porque no involucra directamente a autoridades o instituciones gubernamentales, y, por lo tanto, contribuyen poco a la fuerza de la voz ciudadana.

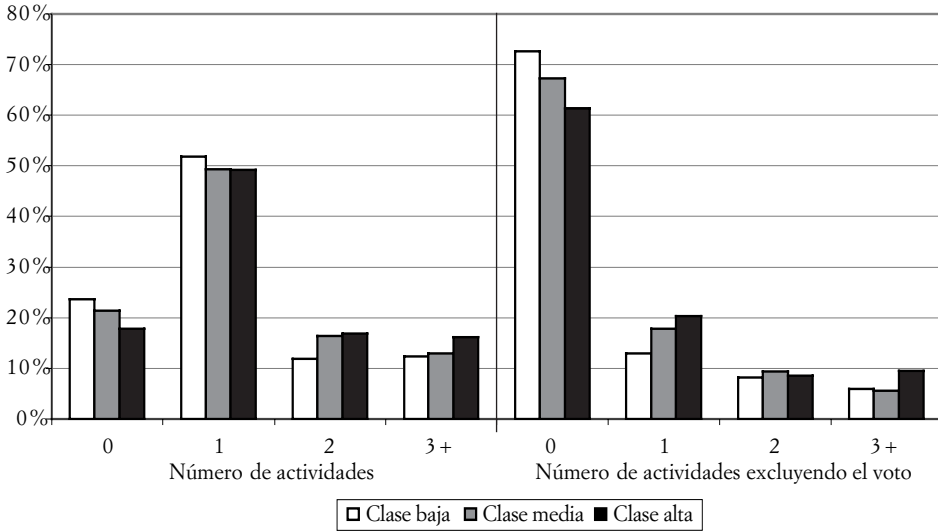
GRÁFICO IA
ESTRATIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO (2004)



Fuente: Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), México 2004.

6. Aunque este estudio se repitió en el 2006, los datos de esa encuesta aún no están disponibles al público. El 2004 es el año más reciente para el cual existen datos disponibles.

GRÁFICO II
 ACTIVISMO POLÍTICO POR NIVEL DE INGRESOS (2003)

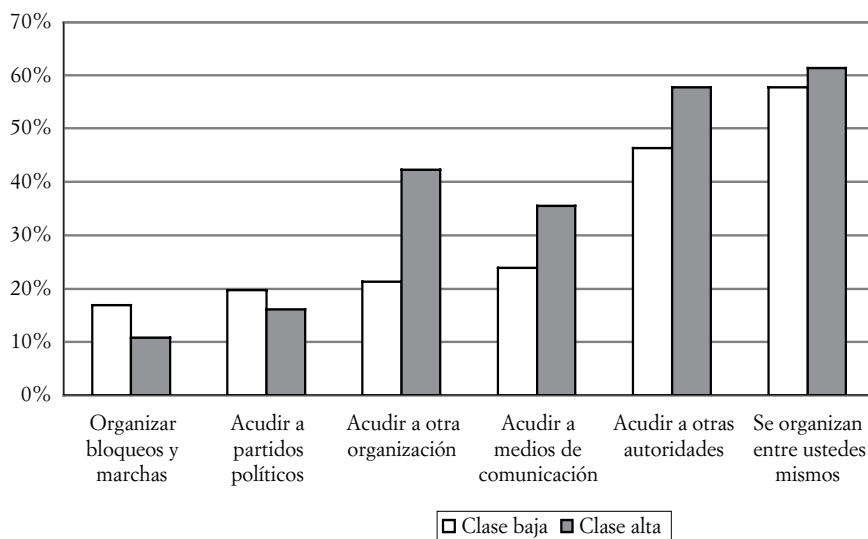


Fuente: *Comparative Studies of Electoral Systems* (CSES).

La cantidad de voz que los ciudadanos pueden ejercer depende no sólo del tipo de actividades que emprenden, sino también de la frecuencia con la que ellos participan en actividades políticas. A mayor número de actos, mayor será el potencial de voz que tendrán en el proceso democrático, especialmente si se involucran en múltiples actividades más allá del voto. El Gráfico II muestra otra dimensión de la estratificación de la participación política en México al comparar niveles de activismo de diferentes clases sociales. A primera vista, los ciudadanos mexicanos parecen ser muy activos en la política, ya que una grandísima mayoría, incluyendo el 76% de los pobres, participa en al menos un acto político. Sin embargo, la imagen que emerge es una en la cual los pobres dependen casi exclusivamente del voto para ejercer su voz, mientras que los individuos con mayores recursos tienden a utilizar diferentes estrategias para dar a conocer sus intereses y para influir sobre las decisiones de las autoridades gubernamentales. Si excluimos el voto en la cuenta de actos políticos, el 73% de mexicanos pobres no participan de ninguna manera en el proceso democrático, comparado con el 61% de los ricos. Además, es más probable que la gente con mayores recursos participe en múltiples actos políticos: mientras el 6% de gente de clase baja participó en tres o más actividades políticas, el 10% de gente de clase alta participó con esa frecuencia.

Más allá de estrategias formales de participación, como votar, marchar y asistir a mítines políticos, los mexicanos parecen depender mucho de estrategias informales o de ayuda propia para resolver sus problemas. Una encuesta elaborada conjuntamente

GRÁFICO III
REPERTORIOS POLÍTICOS POR CLASE SOCIAL (2003)



Fuente: IFE (2003).

por el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el 2003 hizo la siguiente pregunta: «Si las autoridades no les resuelven un problema en donde usted vive ¿por lo general qué hacen los vecinos?» (IFE-UNAM, 2003). A pesar de que esta pregunta no indaga directamente sobre el comportamiento político de los encuestados, sí nos da información sobre los repertorios que la gente tiene a su disposición cuando se enfrentan a un gobierno que no responde a las necesidades ciudadanas. El Gráfico III demuestra los resultados de esta pregunta tanto para gente de bajos recursos como para gente de altos recursos económicos. Se observa que una mayor proporción de gente rica cree que tiene una variedad de estrategias con alta capacidad de transmitir voz a su disposición. Es mucho más probable que mexicanos de altos ingresos mencionen actividades como contactar a organizaciones, a los medios de comunicación o a otras autoridades (42%, 36% y 58%); los pobres, por otro lado, tienden a pensar que sus vecinos intentarían organizar bloqueos o marchas o acudir a partidos políticos, pero en números mucho menores (17% y 20%). Estrategias de ayuda propia («se organizan entre ustedes») fueron las actividades que recibieron mayor mención por ambos grupos (58% para pobres y 61% para ricos). Pero éstas se caracterizan por tener poca capacidad de transmitir información o generar presión sobre las autoridades.

IV. IMPLICACIONES PARA LA VOZ Y LA IGUALDAD EN MÉXICO

IV.1. Voto y actividades electorales

El establecimiento de elecciones frecuentes, competitivas y limpias en la mayoría de los países latinoamericanos durante las últimas dos décadas ha sido justamente celebrado porque los gobiernos autoritarios de los años pasados gobernaban excluyendo a grandes sectores de la población del proceso político. Incluso en países como México donde los gobernantes se elegían por medio de elecciones regulares, el fraude electoral y la movilización clientelar hacían que éstas sirvieran más para legitimar el régimen autoritario que para darle poder a los ciudadanos sobre sus representantes. Como ya hemos visto, hoy en día el voto es la actividad política más común en México. Dada la competitividad de las elecciones y las garantías contra el fraude, el sufragio popular se ha convertido en un mecanismo creíble para reemplazar a gobernantes y partidos en el poder.

Sin embargo, el voto es una herramienta poco eficaz para incidir en las decisiones de las autoridades. Aunque está abierto a casi todos los ciudadanos, si éstos no se organizan en grupos grandes y disciplinados en torno a cuestiones de política pública, el sufragio transmite muy poca información sobre las preferencias de los ciudadanos a los representantes y ejerce aún menos control sobre el comportamiento de éstos (Piven y Cloward, 1997: 281). Además, una de las conclusiones más importantes de la investigación sobre la participación ciudadana es que la participación eficaz en sistemas democráticos requiere de recursos, habilidades y capacidades que los pobres simplemente no poseen. Se puede concluir, por lo tanto, que un sistema político que depende sobre todo del voto para asegurar la representatividad y la rendición de cuentas es una democracia «pobre», porque los ciudadanos tendrán pocas oportunidades para presionar a sus representantes y los pobres menos oportunidades que todos.

La actividad ciudadana en campañas electorales, como asistir a mítines con candidatos, trabajar como voluntario para un partido o donar dinero a algún candidato conlleva un potencial mayor para transmitir la voz ciudadana que el voto en sí mismo. La participación ciudadana durante las campañas electorales siempre ha sido importante en México⁷, pero hoy en día las campañas se han vuelto tan complejas, sofisticadas y caras, que los candidatos dependen más que nunca de la participación directa de ciudadanos para organizar campañas exitosas. Individuos que se ofrecen para trabajar en campañas o que donan dinero a candidatos tienen múltiples oportunidades para hablar con los mismos candidatos o sus asesores. A la vez, los candidatos tienen mayores incentivos para escuchar y responder a los mensajes que reciben de activistas, quienes ganan así un poco de influencia. Es igual de importante notar que la participación en campañas electorales, a diferencia del voto, se puede multiplicar ya sea en su frecuencia como en su intensidad, creando condiciones en las cuales las

7. Aun si sólo para confirmar de manera ritualística la legitimidad del proceso electoral (L. ADLER LOMNITZ, C. LOMNITZ ADLER e I. ADLER, 1993).

opiniones de los ciudadanos ya no tienen el mismo peso. El ejemplo más claro de esto se da con las donaciones de dinero a candidatos.

A pesar de que existen límites impuestos por la ley a la cantidad que los individuos pueden donar a un candidato, las donaciones se pueden multiplicar mucho más fácilmente que otras actividades, creando así desigualdades entre la influencia de los ciudadanos. Esto significa que individuos y grupos pueden lograr mayor respuesta a sus necesidades y preferencias de parte de candidatos y representantes simplemente aumentando el volumen de su participación en campañas electorales (Verba, Schlozman y Brady, 1995: 45-46). Ya se ha visto que gente con mayores niveles de ingresos participa el doble en este tipo de actividades comparado con gente de bajos ingresos (Gráfico 1), y es mucho más probable que donen dinero a candidatos. Esto puede crear una gran desigualdad en la voz ciudadana que coincide con las severas desigualdades económicas que existen en México y crea las condiciones para que los representantes políticos tomen menos en cuenta las preferencias de los pobres. Si éstos no participan en otro tipo de actividades que tienen la capacidad de mandar mensajes claros y fuertes a las autoridades —por medio de marchas o solicitudes de apoyo, por ejemplo— tendrán poca voz en las decisiones gubernamentales que más les afectan.

IV.2. Peticiones y contacto con autoridades

Al igual que la participación en campañas, los ciudadanos pueden mandar mensajes claros y precisos sobre sus preferencias sobre los asuntos políticos que les incumben poniéndose en contacto directo con representantes políticos o autoridades. Este tipo de actividades no sólo sirve para mandar mensajes claros, sino también se puede multiplicar para incrementar la presión que se ejerce sobre las autoridades. Ambas características hacen que estas actividades puedan servir para minimizar los sesgos que se crean en el proceso político por la desigual participación de los pobres en actividades electorales. De hecho, durante los gobiernos priistas, el contacto directo con las autoridades para solicitar beneficios y resolución a problemas fue una de las actividades políticas más importantes para los grupos populares. Cornelius (1975) estimó que, durante las décadas de 1960 y 1970, entre el 17% y el 26% de los mexicanos de bajos ingresos habían tenido contacto directo con el Estado para buscar la resolución de sus necesidades. Aunque estas estrategias pueden reflejar las relaciones clientelares entre el Estado y los grupos populares, los pobres de todos modos ven estas estrategias como necesarias para lograr respuestas del Estado a sus demandas (Holzner, 2004). No obstante esto, los pobres ya no participan en este tipo de actividad con la misma frecuencia de antes y de hecho participan con la mitad de la frecuencia que la gente con ingresos altos (Holzner, 2007).

Este creciente desfase por niveles de ingresos se puede explicar si ponemos atención a la manera en que las reformas económicas y democráticas han impactado sobre la habilidad y los incentivos de los ciudadanos para contactar a las autoridades. A raíz de las reformas institucionales que centralizaron las decisiones sobre el gasto público

en ministerios distantes de los ciudadanos y que establecieron fórmulas apolíticas para la distribución del gasto social, fórmulas que aíslan a las autoridades de la presión ciudadana, es ahora mucho más difícil, caro e ineficaz presentar peticiones a los representantes del Estado. Ahora introducir una solicitud a una dependencia del gobierno requiere de una inversión importante de dinero, tiempo y salario perdido. Además, los ingresos de trabajadores y campesinos disminuyeron de manera significativa durante las últimas dos décadas, lo que hace que el costo relativo de presentar una petición es mucho más alto ahora que en el periodo anterior a las reformas (Boltvinik, 2003; Portes y Hoffman, 2003).

Para tener éxito, las solicitudes ciudadanas requieren el apoyo de aliados dentro de las dependencias y de organizaciones locales que pueden subsidiar los costos de las solicitudes, o dado el caso, meter las solicitudes ellos mismos. Sin embargo, las organizaciones tradicionales de trabajadores y campesinos se han debilitado a raíz de las crisis económicas y de las políticas de mercado que han reducido el acceso que tienen a los recursos del Estado. Y a pesar de que la sociedad civil se ha revitalizado con la creación de miles de nuevas organizaciones, la mayoría de éstas son pequeñas, débiles y sin lazos entre sí (Olvera, 2004). Aunque es cierto que las relaciones clientelares que establecieron las organizaciones del PRI con los grupos populares desmovilizaron y fragmentaron la participación ciudadana, hoy la sociedad civil en México sigue estando muy fragmentada, con organizaciones que compiten entre sí por recursos escasos y por acceso a las instituciones políticas (Kurtz, 2004). Sin duda, el gran número de asociaciones independientes en México significa que los grupos populares han ganado en autonomía política, pero la inhabilidad de estas organizaciones para agregar los intereses de los pobres también significa que han perdido cierta capacidad de voz.

IV.3. Protestas y marchas

Nos podemos imaginar que al enfrentarse a una situación económica que no mejora, con poco acceso político, y con reformas tecnocráticas que han disminuido la eficacia de las formas tradicionales de participación, los pobres sienten que tienen pocas opciones a su disposición para participar en el nuevo proceso democrático. Esto podría llevarlos a radicalizar su participación e intentar protestas y marchas con más frecuencia. De hecho, mucha de la literatura sobre la participación política de grupos populares en América Latina se ha enfocado en protestas, movimientos armados y otros tipos de acciones colectivas. Sin embargo, la predilección de los pobres por actos revoltosos ha sido exagerada en la literatura. La frecuencia de protestas, bloqueos y marchas en México, como en otros lados, depende más de las acciones del Estado y de los líderes políticos, además de la fuerza de las organizaciones sociales, que de las quejas ciudadanas (Tarrow, 1998).

En realidad, la mayoría de la gente pobre en México ve las protestas como estrategias arriesgadas, peligrosas, y no muy eficaces, que se deben intentar sólo cuando todas las demás opciones se hayan agotado (Holzner, 2004). Esto no se debe interpretar como

síntoma de una cultura política caracterizada por el respeto a las figuras de autoridad, como algunos académicos han afirmado (Almond y Verba, 1963; Durand Ponte, 1995 y 1997; Stokes, 1995). Más bien, es una actitud que emerge de un reconocimiento de los riesgos, costos y dificultades reales que conllevan este tipo de actividades. Debido a la centralización de decisiones sobre la política pública en México, las campañas de protesta necesitan presionar a los niveles más altos de gobierno de manera sostenida. Claro, éstas son precisamente las protestas más visibles y que reciben la mayor cobertura por la prensa, pero también son casi imposibles de emprender para la gente pobre y desorganizada, que caracteriza a gran parte de la ciudadanía. Dado el hecho de que la gente de altos ingresos participa el doble que la gente pobre en marchas y protestas, se puede sospechar que ellos pueden soportar mejor los costos y riesgos de estas actividades y que tienen mayores oportunidades e incentivos para movilizarse en contra del Estado⁸.

¿Qué podemos concluir de estos cambios en el comportamiento político de los ciudadanos mexicanos? El modelo de desarrollo económico que se impulsó en México durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, que se caracterizó por grandes inversiones del Estado en proyectos económicos y de desarrollo social, creó lazos institucionales entre el Estado y grupos sociales que fomentaron la idea, sobre todo en la gente pobre, de que acciones dirigidas hacia el Estado eran la mejor estrategia para resolver problemas individuales y colectivos (Grindle, 1986; Hamilton, 1982). Aunque esto significó que mucha de la participación ciudadana que se generó fue controlada por el Estado y fue diseñada para apoyar a candidatos priistas en las elecciones, también creó importantes oportunidades para que los ciudadanos de menores recursos se involucraran en la vida política de sus comunidades. A pesar de que las reformas democráticas han liberado a muchos grupos populares de este control clientelar y autoritario⁹, es difícil concluir en base a los actuales niveles muy bajos de actividad política de los más pobres, que ellos poseen mayor voz política y mayor capacidad de influenciar las decisiones de las autoridades que antes.

IV.4. Prácticas informales y estrategias de salida

Hasta ahora he enfatizado lo que los pobres no están haciendo políticamente. Vale la pena poner atención también a las estrategias que sí eligen, aunque no sean actividades dirigidas hacia el Estado. A pesar de que las clases bajas están votando menos que antes, participan en campañas con menos frecuencia y evitan las protestas, esto no significa que constituyan una clase apática¹⁰. Lo más probable y lógico es que persigan

8. Existe evidencia que sostiene esta afirmación. Para mayores detalles, ver C. HOLZNER (2007).

9. Ver, por ejemplo, los volúmenes editados por J. ALONSO, A. AZIZ y J. TAMAYO (1992) y V. M. DURAND PONTE (1994).

10. Ver también la discusión de A. PORTES y K. HOFFMAN (2003: 66-74) y V. M. DURAND PONTE (1995).

sus intereses fuera de la arena política formal. La migración laboral a zonas urbanas dentro de México y hacia los Estados Unidos es una de las estrategias de salida más común entre la gente de bajos ingresos (Cerutti y Massey, 2004; Durand y Massey, 2004; Massey, Durand y Malone, 2002). La migración hacia los Estados Unidos ha ido incrementándose constantemente desde el inicio del proyecto neoliberal en México, motivado en parte por políticas como la privatización del ejido en 1992 y la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994 (Cornelius y Martin, 1993; Massey y Espinosa, 1997)¹¹. Estas reformas han obligado a millones de campesinos a dejar el campo pero aún no han producido el aumento esperado en el número de empleos. La afiliación con organizaciones no gubernamentales y otros tipos de organización de base también se han convertido en alternativas atractivas a la participación política formal para los pobres. La retirada del Estado de muchas de sus funciones tradicionales, un mandato por el Banco Mundial de canalizar fondos para el desarrollo a través de ONG y la disponibilidad de fondos gubernamentales y de fundaciones internacionales han abierto oportunidades nuevas para las ONG, las cuales han proliferado por todo México y juegan un papel cada vez más importante en la vida de los pobres.

Como vimos anteriormente, los ciudadanos de bajos recursos económicos también están dirigiendo sus energías hacia estrategias de ayuda propia para proveer por sí mismos los bienes que ya no reciben del Estado. Guttman (2002), quien ha estudiado a los habitantes de las colonias populares en la Ciudad de México, comenta que los movimientos urbanos populares de las décadas de 1970 y 1980 que luchaban por cambios estructurales amplios han sido reemplazados por lo que él llama la «microadministración de problemas sociales», o sea, actividad diseñada para resolver problemas muy específicos sin ningún compás ideológico ni capacidad de agregación. Esto no implica que las colonias populares estén desprovistas de actividad colectiva. Al contrario, zonas urbanas populares a lo largo del país están llenas de actividad comunitaria como juntas y asambleas de vecinos, cooperación entre vecinos para resolver problemas en común, como la falta de agua o electricidad y debates animados sobre asuntos nacionales e internacionales y cómo éstos afectan la vida de los colonos (Guttmann, 2002; Rubin, 1997). Esta energía dedicada a actividades comunitarias y de ayuda propia nos indica que la gente es consciente de que la participación política dirigida hacia representantes del Estado no es una estrategia eficaz para satisfacer sus necesidades más apremiantes de comida, seguridad económica, vivienda y una vida mejor para sus hijos.

Henry Dietz encontró una dinámica similar entre los pobladores en Lima. Según él, la democratización no supuso un mayor acceso al Estado para los pobres. Al contrario, a medida que empeoraban las condiciones económicas y las políticas de Estado se volvían cada vez más ineficaces, los pobladores invertían cada vez más energías en actividades comunitarias (1998: 131-132).

[...] A través de su comportamiento informal los pobres demostraban que reconocían que el Estado no podía o no quería ayudarlos. La disminución en el número de pobladores

11. Cabe destacar que este aumento en la migración ocurrió no obstante la implementación por parte del gobierno norteamericano de políticas migratorias cada vez más restrictivas.

que peticionaban al Estado [...] nos demuestra que los pobres veían a estas actividades como ineficaces e irracionales (236-237).

A pesar de las diferencias entre sí, las características que actividades como la emigración, la afiliación con ONG y las estrategias de ayuda propia comparten es que comunican muy poca información a los representantes en el gobierno y en vez de presionar a las autoridades, las sacan de un apuro, ya que son los ciudadanos mismos los que se proveen de bienes colectivos. Éstos no son actos por medio de los cuales los ciudadanos pueden ejercer su voz.

V. CONCLUSIÓN

¿Qué significa esto para la calidad de la democracia en México? La ratificación del Tratado de Libre Comercio y la derrota del PRI en el 2000 fueron sin duda momentos culminantes para el desarrollo político del país, evidencia de que un sistema democrático moderno se estaba arraigando. Este análisis revela, sin embargo, que todavía faltan verdaderas oportunidades para que se escuchen las voces de los ciudadanos más pobres en las aulas del poder. Por una parte, la competitividad del sistema electoral aún no logra movilizar y «empoderar» a las clases bajas de manera consistente. La falta de un partido fuerte de izquierda que sea capaz de competir de manera creíble en la mayoría de las elecciones locales y nacionales significa que todavía hacen falta alternativas deseables para los pobres a la hora de votar¹².

El declive del sistema corporativo ha permitido que surjan miles de nuevas organizaciones autónomas dentro de una sociedad civil revitalizada. Pero éstas no han podido movilizar a los pobres de manera consistente dentro del proceso político, ni han podido acabar con el clientelismo político que sigue restringiendo las oportunidades participativas para muchos. Además, el sistema de representación en México privilegia a los partidos políticos establecidos, impidiendo así que grupos de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil o nuevos movimientos sociales puedan reclamarle al Estado en los foros públicos en maneras que conservan su autonomía (Meyenberg, 1998; Meyenberg y Carrillo, 1999)¹³. Por otro lado, las reformas neoliberales han creado barreras a la participación ciudadana y han reducido el número de sitios institucionales a

12. Aun cuando el Partido Revolucionario Democrático (PRD) sea muy competitivo en la Ciudad de México y en algunos otros Estados, antes del 2006, este partido no ofrecía una opción viable en la mayoría de las elecciones locales y nacionales. Será interesante ver cómo la candidatura perredista de Manuel López Obrador por la Presidencia en el 2006 afecte a largo plazo las actitudes políticas y el comportamiento político de las clases populares.

13. Por ejemplo, las actuales reglas electorales federales en México prohíben que candidatos sin afiliación partidista compitan por puestos públicos. A la vez, los requisitos para registrar un movimiento u organización como partido político para elecciones federales son extremadamente altos, haciendo casi imposible que grupos de la sociedad civil puedan encontrar representación independientemente de los partidos políticos establecidos.

través de los cuales los ciudadanos pueden ejercer su voz política. Esto eleva los costos de acciones políticas a niveles inalcanzables para individuos con pocos recursos económicos (Kurtz, 2004). Juntas, las reformas políticas y económicas impulsadas durante las últimas décadas han creado un proceso político que traduce las desigualdades económicas en desigualdades políticas.

Mucha de la desmovilización y la despolitización de los pobres en México ocurre a nivel de grupos, afectando la capacidad que tienen para intentar actos colectivos. Pero la voz de los pobres también se ha acallado por medio del impacto acumulativo de decisiones de miles de individuos de retirarse de actividades políticas. Según Guttman,

una característica notable del populismo nacionalista que surge después del TLC es la convicción intensificada por parte de muchos que ya no pueden influenciar la política nacional [...] Se vuelven cada vez menos optimistas sobre el futuro de México y cada vez más desilusionados con la democracia en su país [...] Muchos sienten que la realidad es que solo rara vez pueden controlar políticamente sus vidas diarias, y aún con menos frecuencia pueden influenciar un proceso político que se pudiera considerar como democrático (Guttman, 2002: 88)¹⁴.

Por consecuencia, la política popular en México ya no se inspira tanto por cuestiones ideológicas o por un deseo de afectar la dirección de las reformas, sino por necesidades básicas vinculadas a la sobrevivencia diaria: tener acceso a agua potable y a electricidad, organizar la recolecta de basura y conseguir una vivienda digna. Es cierto que estas actividades comunitarias pueden ser vistas como una forma de actividad cívica, es más probable que sean el resultado de un pesimismo adquirido al darse cuenta de que actividades políticas dirigidas a los gobiernos no darán resultados. Es posible que a largo plazo esta actividad comunitaria produzca una ciudadanía más activa en México, pero por ahora estas estrategias no sirven para comunicar preferencias a las autoridades, ni para agregar intereses y mucho menos para poner presión a los representantes elegidos.

Aún no podemos saber si estas tendencias son un reajuste temporal o si anuncian cambios fundamentales en los patrones de participación ciudadana en México. Por ahora parece que los nuevos nexos que la democracia de libre mercado ha establecido entre el Estado mexicano y sus ciudadanos están sofocando la voz de los pobres, no por medio de amenazas de represión, sino al hacer más difícil y costosa la movilización y participación política o al canalizar las demandas ciudadanas hacia gobiernos locales o comités vecinales que tienen relativamente poco poder. Aunque la participación ciudadana en estos niveles es importante, difícilmente se traduce en poder político, ni da voz a los pobres dentro de las instituciones donde reside el poder en el sistema democrático mexicano. Por consecuencia, la voz de los pobres en México no se escucha de manera fuerte ni clara, creando pocos incentivos para que los representantes y las autoridades pongan atención a lo que ellos tienen que decir.

14. Ver también el trabajo sobre la redefinición del nacionalismo mexicano por Roberto Gutiérrez López y José Luis Gutiérrez E.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- ADLER LOMNITZ, Larissa; LOMNITZ ADLER, Claudio y ADLER, Ilya. The Function of the Form: Power Play and Ritual in the 1988 Mexican Presidential Campaign. En LEVINE, Daniel H. y ARBOR, Ann (eds.). *Constructing Culture and Power in Latin America*. Michigan: The University of Michigan Press, 1993.
- ALMOND, Gabriel y VERBA, Sidney. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- ALONSO, Jorge; AZIZ, Alberto y TAMAYO, Jaime (coords.). *El Nuevo Estado Mexicano. Tomo III: Estado, Actores y Movimientos Sociales*. México D.F.: Nueva Imagen, 1992.
- BOLTVINIK, Julio. Welfare, Equality, and Poverty in Mexico, 1970-2000. En MIDDLEBROOK, Kevin J. y ZEPEDA, Eduardo (eds.). *Confronting Development: Assessing Mexico's Economic and Social Policy*. Stanford: Stanford University Press, 2003.
- BOOTH, John A. y SELIGSON, Mitchell (eds.). *Political Participation in Latin America: Citizen and State*. Volumen 1. New York: Holmes and Meier, 1978.
- CERUTTI, Marcela y MASSEY, Douglas S. Trends in Mexican Migration to the United States, 1965 to 1995. En DURAND, Jorge y MASSEY, Douglas S. *Crossing the Border: Research from the Mexican Migration Project*. New York: Russell Sage Foundation, 2004.
- Comparative Study of Electoral Systems 1997-2003*. [Citado en 2007]. Disponible en www.cses.org.
- CORNELIUS, Wayne A. *Politics and the Migrant Poor in Mexico City*. Stanford: Stanford University Press, 1975.
- CORNELIUS, Wayne A. y MARTIN, Philip L. The Uncertain Connection: Free Trade and Rural Mexican Migration to the United States. *International Migration Review*, 1993, 27, n.º 3: 484-512.
- CRAIG, Ann L. y CORNELIUS, Wayne A. Political Culture in Mexico: Continuities and Revisionist Interpretations. En ALMOND, Gabriel y VERBA, Sydney (eds.). *The Civic Culture Revisited*. Boston: Little Brown, 1980.
- DAHL, Robert A. *Democracy and its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- DIETZ, Henry. *Urban Poverty, Political Participation and the State*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1998.
- DURAND, Jorge y MASSEY, Douglas S. (eds.). *Crossing the Border: Research from the Mexican Migration Project*. New York: Russell Sage Foundation, 2004.
- DURAND PONTE, Víctor Manuel. *La construcción de la democracia en México*. México D.F.: Siglo XXI Editores, 1994.
- Cultura política de masas y el cambio del sistema político: El papel de la ambigüedad cultural. *Revista Mexicana de Sociología*, 1994, 59, vol. 1: 19-35.
- La cultura política autoritaria en México. *Revista Mexicana de Sociología*, 1995, 57, vol. 3: 67-103.
- GRINDLE, Merilee. *State and Countryside: Development Policy and Agrarian Politics in Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.
- GUTIÉRREZ LÓPEZ, Roberto y GUTIÉRREZ E., José Luis. En torno a la redefinición del nacionalismo mexicano. *Sociológica*, 1993, 8, vol. 21: 87-101.
- GUTMANN, Matthew C. *The Romance of Democracy: Compliant Defiance in Contemporary Mexico*. Berkeley: University of California Press, 2002.
- HAMILTON, Nora. *The Limits of State Autonomy: Post-Revolutionary Mexico*. Princeton: Princeton University Press, 1982.

- HOLZNER, Claudio A. End of Clientelism? Strong and Weak Networks in a Mexican Squatter Movement. *Mobilization: An International Journal*, 2004, 9, n.º 3: 223-240.
- The Poverty of Democracy: Neoliberal Reforms and Political Participation of the Poor in Mexico. *Latin American Politics and Society*, 2007, n.º 49, vol. 2, en prensa.
- HUNTINGTON, Samuel P. y NELSON, Joan M. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
- IFE-UNAM. Encuesta nacional de cultura política. La naturaleza del compromiso cívico: capital social y cultura política en México. Mexico: IFE-UNAM, IIS, Unidad de Estudios sobre la Opinión, 2003.
- KLESNER, Joseph y LAWSON, Chappell. Adiós to the PRI? Changing Voter Turnout in Mexico's Political Transition. *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, 2000, 17, n.º 1: 17-39.
- KURTZ, Marcus J. *Free Market Democracy and the Chilean and Mexican Countryside*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- LAWSON, Chappell y KLESNER, Joseph. Political Reform, Electoral Participation, and the Campaign of 2000. En DOMÍNGUEZ, Jorge y LAWSON, Chappell (eds.). *Mexico's Pivotal Democratic Election: Candidates, Voters and the Presidential Campaign of 2000*. Stanford: Stanford University Press, 2004.
- LEVINE, Daniel H. y MOLINA, José. La calidad de la democracia en América Latina: una visión comparada. *América Latina Hoy*, abril del 2007, vol. 45: 17-46.
- MASSEY, Douglas S.; DURAND, Jorge y MALONE, Nolan J. *Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Migration in an Era of Economic Integration*. Nueva York: Russell Sage Foundation, 2002.
- MASSEY, Douglas S. y ESPINOSA, Kristin E. What's Driving Mexico-U.S. Migration? A Theoretical, Empirical, and Policy Analysis. *American Journal of Sociology*, 1997, 102, vol. 4: 939-999.
- MEYENBERG, Yolanda. Representación y la construcción de un gobierno representativo: Discusiones sobre el caso de México. *Revista Mexicana de Sociología*, 1998, 60, vol. 2: 219-238.
- MEYENBERG, Yolanda y CARRILLO, Ulises. El Partido de la Revolución Democrática: Avances Electorales, Responsabilidad de Gobierno y Ambigüedad Identitaria. *Revista Mexicana de Sociología*, 1999, 61, vol. 3: 53-68.
- OLVERA, Alberto J. Civil Society in Mexico at Century's End. En MIDDLEBROOK, Kevin J. (ed.). *Dilemmas of Political Change in Mexico*. Londres: Institute of Latin American Studies; Center for U.S.-Mexican Studies, 2004.
- PIVEN, Frances Fox y CLOWARD, Richard A. Low Income People and the Political Process. En PIVEN, Frances Fox y CLOWARD, Richard A. (eds.). *The Breaking of the American Social Compact*. Nueva York: The New Press, 1997.
- PORTES, Alejandro y HOFFMAN, Kelly. Latin American Class Structures: Their Composition and Change During the Neoliberal Era. *Latin American Research Review*, 2003, 38, n.º 1: 41-82.
- RUBIN, Jeffrey W. *Decentering the Regime: Ethnicity, Radicalism, and Democracy in Juchitán, Mexico*. Durham, NC: Duke University Press, 1997.
- SELIGSON, Mitchell. *Auditoria de la Democracia 2004*. [Citado en 2007]. Disponible en <http://site-mason.vanderbilt.edu/lapop/Online>DataAnalysis>.
- STOKES, Susan C. *Cultures in Conflict: Social Movements and the State in Peru*. Berkeley: University of California Press, 1995.
- TARROW, Sidney. *Power in Movement*. 2.ª edición. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- VERBA, Sidney; SCHLOZMAN, Kay Lehman y BRADY, Henry E. *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
- World Values Surveys*. ICPSR, 1995-1997, 1999-2002. [Citado en 2003].